

Situación De Derechos Humanos De Habitantes De Calle Y La Necesidad De Políticas Públicas Del Municipio De Dosquebradas- Risaralda¹

Jésica Bustamante Durán

Abogada, Especialista en Derecho de Familia, Universidad Externado de Colombia, estudiante de la especialización de derecho Administrativo, Universidad Libre seccional Pereira.

jessicabustamante2@hotmail.com

Beatriz Helena Mejía Garcés

Abogada, estudiante de la especialización de derecho Administrativo, Universidad Libre seccional Pereira. beatrizmejiagarces@hotmail.com

Resumen.

Desde hace algunos años, se viene evidenciando el gran aumento en las personas habitantes de calle, esto se debe al incremento del consumo de drogas ilícitas, falta de educación, desigualdad, falta de redes de apoyo, falta de amor, o la simple rebeldía de las personas del país que se sumerjan en un mundo del que casi nadie puede escapar. Este texto aporta a la reflexión académica en materia de la normatividad existente de derechos humanos, tales como dignidad humana, vida digna, vivienda digna, salud, educación, libre desarrollo de la personalidad; que

¹ Este artículo hace parte de los resultados finales de la investigación SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE HABITANTES DE CALLE Y LA NECESIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS- RISARALDA, Universidad libre seccional Pereira.

conllevan a una exigibilidad de los derechos por parte de personas habitantes de calle debido a que es clara la vulneración de las garantías fundamentales de este grupo, tanto para mayores de edad como para los menores de edad.

Palabras Claves: Habitantes De Calle, Políticas Públicas, Dignidad Humana, Restablecimiento de derechos.

INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo es un artículo de reflexión orientado a demostrar la incidencia de la vulneración de los derechos humanos de personas habitantes de calle por factores asociados al consumo de drogas, mendicidad, falta de educación, de oportunidades, el acompañamiento del núcleo familiar, su entorno social y la vulneración del derecho a la dignidad humana por parte del Estado. Así mismo, parte del interés de este escrito girará en torno a unos subtemas previamente seleccionados, relacionados con conceptos de derechos humanos, convenciones, acuerdos, tratados de estos mismos, frente a la problemática de los habitantes de calle, partiendo del hecho de la vulneración de derechos.

En Colombia, en la última década, se ha venido incrementando el porcentaje de personas que se encuentran en situación de calle (Ministerio de Protección Social, 2018); el día 28 de mayo del año 2016 las autoridades de policía realizaron una intervención en la calle de ‘El Bronx’, en el sector del Voto Nacional, ubicado en pleno centro de la ciudad de Bogotá, esto generó un despliegue de los habitantes de calle que allí se encontraban a las pequeñas ciudades lo que, días después, llevó el incremento de habitantes de calle en Dosquebradas, municipio de Risaralda, de

manera irracional , generando consigo vulneración a su entorno familiar, social, e institucional. Esto trajo consecuencias y problemáticas en los barrios, atrayendo zonas de expendio de drogas ilícitas, generando consigo vulnerabilidad para la comunidad en general; es por ello que se formula el siguiente interrogante: ¿existe vulneración los derechos humanos a personas habitantes de calle del municipio de Dosquebradas, Risaralda en el periodo comprendido entre 2016 a 2018?

En la actualidad esta problemática parece no tener solución, pues se evidencia el vacío institucional debido a la falencia de mecanismos que solucionen el incremento de habitantes de calle, dado que las personas habitantes de calle se encuentran vulneradas y olvidadas por parte del estado, pues no se cuenta con políticas públicas que contrarresten esta problemática y garanticen derechos fundamentales para todas las personas sin hogar, y con necesidades como cualquier otra.

Este artículo presenta gran relevancia debido a que en nuestro ordenamiento jurídico con la Constitución de 1991, priman los derechos fundamentales, tales como la vida, dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la educación, la vivienda digna, la familia, etc. Por lo tanto, parte del interés de este escrito girará en torno a la necesidad de políticas públicas que protejan los habitantes de calle, políticas relacionadas con los asuntos de normatividad frente a la problemática de estos, que se ven plasmados, precisamente, en el tema de políticas públicas.

Para el desarrollo del artículo se dispondrán varios capítulos en los cuales se explicará: i) se realizarán actividades para identificar la normatividad nacional en cuanto a la protección de los derechos humanos para las personas habitantes de calle; ii) se determinará el diagnostico de los

derechos humanos de personas habitantes de calle a nivel nacional y el municipio de Dosquebradas, realizado por la Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio, y iii) se analizaran los lineamientos de Política Pública Social para habitantes de la calle a cargo del Ministerio De Salud. Lo anterior, con el fin de generar respuesta al interrogante: ¿cuál es el estado actual de los derechos humanos de las personas habitantes de calle del municipio de Dosquebradas, Risaralda?

MATERIALES Y MÉTODOS.

En el presente artículo se estudiaron los resultados planteados al identificar la normatividad nacional en cuanto a la protección de los derechos humanos de personas habitantes de calle, para ello se llevó a cabo la recopilación de normatividad nivel nacional e internacional de habitantes de calle, los conceptos por parte del Estado y de sus entes competentes y la aplicabilidad que se le dio a las mismas; por esto, el tipo de investigación fue socio-jurídico puesto que se enfocó en la aplicación de la norma frente a la sociedad, en este caso a los habitantes de calle.

Se partió de esta amplitud debido a que en el municipio de Dosquebradas existió un incremento del número de habitantes de calle, generando consigo una vulneración de derechos para ellos, para los estudiantes, funcionarios públicos, y sociedad en general, porque al transitar por las calles del municipio y ver en sus entornos personas viviendo en condiciones precarias en las calles, consumiendo sustancias psicoactivas a plena luz del día, genera consigo una gran problemática para la población. La temporalidad se recopiló desde el año 2016 a 2018, en razón a que se abordó el estado actual de los derechos humanos, la aplicabilidad en la vigencia del periodo electoral del alcalde municipal, y por tanto se consideró pertinente recopilar la información de un periodo y no de dividir dos mandatos, pues bien no se hubiera podido abordar

completamente el tema, es por ello que el tipo de investigación aplicada involucró un carácter mixto, pues se utilizó información cualitativa y cuantitativa, realizándose un barrido de las normas, sus estadísticas, causas y efectos de los cuales se obtuvo un resultado, todo esto permitió la construcción a la necesidad de las condiciones sociales de los habitantes de calle.

En el desarrollo de la investigación se emplearon fuentes primarias, como el diseño de entrevistas a funcionarios públicos, entrevistas diseñadas a habitantes de calle, entrevistas semiestructuradas a la sociedad en particular; como fuente secundaria se aplicó todo el ordenamiento jurídico, como lo fue la Constitución Política de Colombia del año 1991, Derechos Humanos de personas habitantes de calle y los Convenios Internacionales que el Estado Colombiano ha suscrito para la protección de los derechos de las personas habitantes de calle y con estos, la protección de los menores de edad habitantes de calle así como la erradicación de toda forma de pobreza.

Se examinaron los programas y estrategias diseñadas por las instituciones encargadas de la protección de los habitantes de calle. Por lo anterior, se aplicaron dos entrevistas a los directores de las dependencias que dirigen programas sociales en el Municipio de Dosquebradas, es decir al Personero Municipal y el Secretario de Desarrollo Social, con el fin de que dieran a conocer el diagnóstico frente a los Derechos Humanos de personas habitantes de calle a nivel nacional y en el municipio de Dosquebradas entre el año 2016-2018 realizado por la Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio en mención; todo esto se realizó con el fin de Establecer la correlación entre la situación de los Derechos Humanos de las personas habitantes de calle del municipio de Dosquebradas frente a los lineamientos de política pública a nivel nacional.

MARCO CONCEPTUAL

Para estructurar un lineamiento claro y específico, es necesario precisar ciertos conceptos que, para la presente investigación, son indispensables para la comprensión del tema. Según algunos doctrinantes, es válido resaltar que en todas las normatividades universales existen los derechos humanos, pues bien, estos van implícitos, son inherentes a la persona, a mejorar su calidad de vida y mantener un equilibrio que permita su desempeño en los diferentes ámbitos de su vida, una base para hacer cumplir sus derechos y no existir discriminación bajo ninguna circunstancia, pues los derechos humanos están íntimamente relacionados con de la dignidad de la persona frente al Estado, aquí se destacan dos aspectos importantes que son: “en primer lugar, que los derechos humanos son inherentes a la persona humana y en segundo lugar, que estos deben ser afirmados frente al poder público”. (Ventura, 2005) Es así como queda claro que:

Los derechos humanos son un vínculo para que se pueda vivir en sociedad en condiciones mínimas con la misma dignidad que le es consustancial. Se reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer (Nikken, 2019).

En síntesis, los derechos humanos son el mínimo de los requisitos para vivir, es esencial, inherente a la persona por el solo hecho de ser persona y los Estados son los obligados a responder por estos mínimos vitales.

Los habitantes de calle son personas, por tanto, se les debe garantizar los derechos humanos. En la actualidad, estas personas son mal llamados o identificados debido a que la sociedad los llama como “desechables” pues consideran que son un desecho y que en la condición en la que habitan son inferiores y que le hacen daño a la sociedad, debido a que, por no tener recursos, se ven obligados a miles de maneras para poder conseguir como sobrevivir.

Ahora bien, en la literatura científica varían significativamente. Incluso, existen varios términos con los que esta población es denominada dentro de una misma lengua. En inglés, por ejemplo, se utilizan las palabras: homeless, marginals, y a los menores de 18 años se les denomina street children, runaway. En español se utilizan los términos: habitante de calle, sin techo e indigentes, y en los censos suelen ser clasificados como personas sin domicilio fijo. Existen, entonces, diferentes expresiones en una misma lengua y variaciones en la traducción de un idioma a otro. (Nieto, 2015)

Para algunos autores como es el caso de Tosi (1999, p.103-126), proyectó algunas definiciones donde situaba el problema en la falta de vivienda, mientras que otras lo matizan dependiendo de los grados de marginalidad y exclusión con que dicha situación está asociada.

Según esta última posición, la condición de las personas sin hogar se puede considerar como el resultado extremo de una cadena de acontecimientos y situaciones, la cual gradualmente les han ido reduciendo la posibilidad de mantener un hogar. Para este autor, en el trasfondo político existiría un correlato de esta polarización, el cual estaría reflejado en la división entre las políticas de vivienda y las políticas de bienestar social. (Nieto, 2015)

Los menores de edad no son indiferentes en esta problemática pues en la actualidad existen habitantes de calle menores de edad, entiéndase que cuando se habla de estos se está incluyendo a niños, niñas y adolescentes, y se debe recordar que, estos tienen una prevalencia, sin embargo, en las últimas décadas se ha deslumbrando diferentes denominaciones para esta población que es minoritaria y que por su carácter de edad tiene una prevalencia de derechos, aun así,

En el contexto internacional, los términos más utilizados son jóvenes sin casa, o habitantes de calle jóvenes, niños y niñas de la calle, y escapados o expulsados del hogar. En su sentido literal, los tres términos hacen referencia a tres tipos diferentes de situaciones que, en todo caso, se pueden cruzar. En los países occidentales desarrollados es común que en las investigaciones dentro de este campo se estudie simultánea, e incluso indiscriminadamente, a estos tres tipos de población. (Nieto, 2015)

La primera vez que se dio uso al termino de menores de edad habitantes de calle fue utilizado en el año 1979, año que fue proclamado por Naciones Unidas como el año del niño. La definición que permite diferenciar entre niños y niñas “de” calle, niños y niñas “en” calle, y niños y niñas en alto riesgo fue desarrollada pensando en la situación de los niños y niñas de la calle de Latinoamérica. (ONU, 1979),

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 1985) identificó tres categorías diferentes para denominar a estos niños que habitan en la calle o que están sin hogar:

Los niños y niñas “en alto riesgo” serían aquellos que viven en condiciones de absoluta pobreza, en tugurios o en casas que no satisfacen las necesidades humanas básicas. Los niños y niñas “en” la calle serían aquellos que pasan buena parte de su tiempo en la calle, usualmente trabajando y sin mayor

supervisión familiar, pero que habitualmente regresan a dormir a su hogar. Y finalmente, los niños y niñas “de” la calle serían aquellos que han hecho de la calle su hogar, es decir, que incluso duermen en la calle, bien sea porque son huérfanos, abandonados o porque han huido de su familia.

A pesar de que se trata de tres categorías, solo las dos últimas han llegado a tener gran aceptación y mayor uso. “Seguramente porque la categoría que hacía referencia al riesgo, en los países en vía de desarrollo, abarcaba a buena parte de la población en situación de pobreza, y el término “niño pobre” tiene más aceptación y uso”. (Nieto, 2015)

La mendicidad se encuentra estrechamente asociada con los habitantes de calle y con la aparición de la propiedad privada y de la falta de recursos o de acceso para todas las personas en igualdad de condiciones, por tanto, la desigualdad en la manera en que se distribuye la riqueza llegaba a límites donde se evidencia la falta de recursos para muchos y la distribución de riqueza para pocas personas.

En un concepto sencillo, el autor Esteban Martínez, nos dice que la mendicidad es la: “Situación social de individuos que no poseen trabajo ni ingresos de ninguna clase y viven de la limosna como medio para solucionar sus necesidades”

De lo anterior se puede concluir que, la mendicidad es un hecho de carácter social que afecta a aquellos individuos que no tienen acceso a trabajo y por tanto no “devengan ingresos económicos, a lo que conlleva a que estos pidan limosna para sobrevivir.” (Montalván, 2011)

Respecto a la mendicidad infantil, algunos autores, entre ellos Montalvo (2009, p 43) preceptúan que:

Se entiende por mendicidad infantil, la situación donde los niños, niñas o adolescentes se ven obligados a la realización continuadamente de actividades o acciones consistente en demandas o pedido de dinero en la vía pública, este tipo de maltrato se encuentra muy relacionado con la Explotación Laboral ya que son asignados a los mismos con el objeto de obtener un beneficio económico.

La mendicidad se genera debido a que las personas no encuentran una asequibilidad para mejorar sus condiciones y toman por último camino solicitar ayuda en las calles, pero el Estado es el principal garantista de los derechos de las personas, pues el derecho de la dignidad humana se encuentra consagrado en la Constitución, estos derechos deben estar fundamentados y consagrados en la constitución política al momento de que los organismos encargados o quienes administrar justicia puedan tomar la determinación para no vulnerar dicho derecho por tanto “proporciona razones decisivas para el obrar humano, razones que se fundan en las distintas dimensiones del bien humano y que se formalizan en normas jurídicas. Pero sucede que esas normas jurídicas son fundamentalmente de dos tipos:

(i) aquellas cuya adecuación directiva con los bienes humanos y su realización común resulta directamente cognoscible, y que se denominan principios de Derecho Natural: *principios* porque son primeros en el orden práctico - jurídico, y de Derecho *Natural* por- que son cognoscibles por la razón natural y porque ordenan la conducta a bienes que responde Las dimensiones perfectivas de la naturaleza huma- (ii) las llamadas normas de Derecho Positivo, es decir, aquellas que surgen inmediatamente de la razón práctica de las autoridades políticas y concretan o determinan el contenido de los principios de Derecho Natural (Aquino, 1956)

También es obligación del Estado la inclusión social que se encuentra estrechamente ligada a la equidad, el Estado debe ser garantista de esto y es este el encargado de reglamentar los

procedimientos para ser efectivo la no discriminación y el acceso a todas las personas. El Banco Mundial (2013) define la inclusión social como:

...el proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos.

Por su parte, la CEPAL (2018) define a la inclusión social como el proceso por el cual “se alcanza la igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades (educación) y el empleo, la segmentación laboral, y la informalidad, que resultan ser las principales causas de la inequidad”

Se puede afirmar que los habitantes de la calle son “considerados por la sociedad como sujetos que no tienen derecho a tener derechos, como se ha señalado a través de los postulados filosóficos de Hannah Arendt”. (Uribe, 2003)

La manera en que el estado soluciona estas problemáticas y garantiza los derechos en mediante políticas públicas con el fin de organizar y administrar sus asuntos e intereses. Así las cosas:

Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. Constituye uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la población. Tipo instrumental o medio para la solución de los problemas sociales. (Ruiz, Cadénas, 2005)

Dicha inclusión requiere de un restablecimiento de derechos, que es un proceso administrativo de restablecimiento de derechos de naturaleza compleja creado por la Ley de Infancia y Adolescencia (Congreso de Colombia, 2006):

como un instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante su inobservancia, amenaza o vulneración proceso especial, ágil y expedito, que sirve a los intereses y derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales en todos los casos siempre prevalecerán frente a los de los adultos involucrados en el mismo asunto.

Toda inclusión debe basarse en la atención integral, pues se entiende por esta como el conjunto de acciones coordinadas con el fin de satisfacer las necesidades esenciales para preservar la vida y aquellas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje humano, acorde con sus características, necesidades e intereses.

Por esta razón es fundamental que tanto en las entidades territoriales, como los prestadores del servicio diseñen e implementen un Plan de Atención Integral (PAI) para la organización sistemática del proceso de atención a los niños, las niñas y sus familias (la comunidad y las instituciones). Éste define los objetivos y las acciones que se van a desarrollar a partir de la caracterización de cada uno de ellos. El PAI señala la ruta de trabajo a seguir y, en tal sentido, debe ser elaborado con la participación de las familias y los docentes, responder al contexto y ser flexible de manera que permita revisiones y ajustes, de acuerdo con los avances y cambios que se den durante el proceso. (Mineducación, 2009)

Es necesario precisar que cuando existe vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes se debe realizar el plan integral para que dicha vulneración no persista en el tiempo y espacio, pues bien, el Estado Colombiano está obligado a proporcionar las garantías y velar por estas para

que no exista discriminación alguna a toda la población y en especial a los menores de edad que son personas de especial protección.

ESTADO DEL ARTE

El tema de estudio del presente Estado del Arte, determina que investigación se realizó a través de un diseño mixto, que tiene como referencia la recopilación de tipo documental, el cual permite que se establezca el procedimiento de selección, acceso y registro de la muestra documental. Se trata entonces de seguir un paso a paso dejando huellas hasta identificar el estado más avanzado del proceso.

A continuación, se plasmará la recopilación crítica de investigaciones y análisis sobre los derechos humanos de los habitantes de calle; teniendo en cuenta que la indagación se convierte en un artículo que permite evidenciar la problemática con contenido real, con información veraz.

Ahora bien, siendo el Estado del Arte la base más profunda de una investigación, se trató de acertar en la responsabilidad ética de asumir el reto de trascender el conocimiento existente, lo cual permite crear un enfoque contextualizado a partir de información existente y disponible en redes sociales y sitios web de investigación.

Con respecto a los Derechos Humanos, se sabe que son derechos inherentes a cada persona, sin distinciones de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, sector étnico, religioso o cualquier otra condición. Los derechos humanos son los mismos para todos los seres humanos sin distinción alguna, todos tenemos la obligación de cumplir y hacerlos cumplir en las diversas situaciones del diario vivir.

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue firmada en la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, sin embargo, tres países se abstuvieron de su firma sin expresar motivo alguno.

Para explicar aplicabilidad de La Declaración Universal de Derechos Humanos en Colombia se tomó con base en el Artículo: **Habitantes de la Calle en Colombia - Presentación desde una Perspectiva Social-preventiva, elaborado por Carolina Gómez Urueta, Derecho de la Universidad del Norte, Barranquilla,** (2015), en esta investigación se encontró que:

...en el plano jurisdiccional, la noción de habitante de la calle (equiparable en un inicio a la de indigente) fue contemplada por primera vez por la Corte Constitucional colombiana en una sentencia de tutela de 1992, en la que se establecen las condiciones o presupuestos para que un “indigente”, de manera excepcional, sea asistido por parte del Estado de forma inmediata en alguna necesidad, en razón de su situación de debilidad manifiesta. Sin embargo, solo hasta 2013, el legislador colombiano mediante la Ley 1641, define al habitante de la calle: “Artículo 2. (...) Habitante de la calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar”. Posteriormente la Corte Constitucional hace la diferenciación conceptual entre el habitante de la calle y el indigente aduciendo que todo habitante de la calle es indigente, pero no todo indigente es habitante de la calle. (Gómez Urueta, 2015)

Tanto la noción de indigente como la de habitante de la calle tienen en cuenta un componente socioeconómico que pone énfasis en la situación de pobreza y un componente geográfico que, en el caso de las personas o grupos en situación de calle, advierte sobre su presencia en el espacio público urbano, donde transcurren sus vidas, denotando la falta de vivienda, variable que

distingue a quienes viven en la calle de otros grupos indigentes (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-385 de 2014).

Evidentemente, la condición de habitante de la calle no se agota allí. Como se muestra en los estudios (Thompson, 1993, pp. 365-374) -y mejor aún en la realidad- habitar en la calle implica situaciones más complejas que se encuentran por fuera del tenor de estos textos como: el hambre, estar expuesto a la intemperie, a una variedad de enfermedades y quebrantos de salud, estar expuesto a la humillación, al desempleo, a la explotación, al hostigamiento (físico y mental), a la depresión, a la desesperación y probablemente a optar por la vía criminal como medio de subsistencia. (Gómez Urueta, 2015)

De acuerdo con el artículo 1° de nuestra Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Se hace necesario entonces detenerse en la expresión Estado Social de Derecho, pues estas son las letras que definen nuestro modelo de Estado. La connotación social implica que:

La acción del Estado debe dirigirse a garantizarles a los coasociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todas las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-747 de 1998).

En sentido metafórico, este individuo “renuncia a lo irrenunciable”, es decir, a derechos como la educación, la salud, la seguridad social, entre otros, porque su voluntad es constatar su libertad y continuar con su vida en las condiciones que tiene hasta el momento.

Para explicar dicha colisión, el estudio se enfocó en el habitante de la calle que opta por permanecer en el camino de la indigencia en ejercicio de su voluntad sin distinguir las causas que lo llevaron hasta allí; por consiguiente, se tuvo en cuenta primordialmente los motivos que justifican su permanencia en la calle y no las causas originarias de dicha situación.

El presente artículo, se centra en las causas originarias del status de habitante de la calle y más exactamente, en las causas que en principio se entiende que están fuera del control de la persona y que tienen su génesis en flagelos típicos de una sociedad excluyente y profundamente fraccionada: pobreza extrema y marginalidad. Por lo anterior, resulta necesario diferenciar los motivos que pueden llevar a un individuo a habitar en la calle.

Las causas que figuran en la jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales, doctrina y estudios de investigación que tratan la habitabilidad de calle, se podrían clasificar de la siguiente manera -la lista no es taxativa ni mucho menos definitiva-:

Las derivadas de razones internas: que ven al habitante de la calle como resultado de problemas psicológicos, de salud y de conflictos de carácter privado como problemas familiares -o carencia de la misma-, que le impiden sostenerse económicamente y consecuentemente, la persona se ve despojada de su hogar (ver Aroca et al., 2013).

Las derivadas de la pobreza extrema y de la marginalidad: que ven al habitante de calle como la representación de una sociedad desigual y excluyente (ver Kellet & Moore, 2003).

Las derivadas del conflicto armado: que ven al habitante de la calle como consecuencia del conflicto armado, y más específicamente del desplazamiento. (Gómez Urueta, 2015)

Definido el habitante de la calle y descrito de manera sucinta el Estado Social de Derecho que nos rige de acuerdo a la investigación precitada, en el presente artículo de investigación se realizó un análisis de las causas mencionadas anteriormente, como es afectado el habitante de calle por las normas jurídicas que lo tienen en cuenta como sujeto de especial protección y, finalmente, el trato que tienen tanto los adultos habitantes de calle como los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y su efectiva o no protección de derechos a través de las políticas públicas diseñadas para esta población vulnerable.

CAPITULO I: NORMATIVIDAD LEGAL DE PERSONAS HABITANTES DE CALLE.

Normatividad Internacional.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, (Paris, 10 de diciembre de 1948), por la cual se da o genera un reconocimiento al derecho de la dignidad humana, como no enajenable de los seres humanos, es decir, por el simple hecho de ser persona se reconoce la dignidad humana sin discriminación alguna, desigualdad. En su preámbulo (1948, p.1) se establece la libertad, la justicia y la paz en el mundo teniendo como el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas, considerando que el desconocimiento de los Derechos Humanos ha causado actos de barbarie se estipula esta declaración para generar conciencia de lo que es la libertad.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969) se establece la protección de la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a la

protección integral, protección a la familia donde se consagra como elemento fundamental de la sociedad, derecho a la igualdad ante la ley, derechos económicos, sociales y culturales.

Los Estados mediante la Convención Única en el año 1961 sobre estupefacientes, en miras de prevenir la salud física y moral, *reconociendo* que las sustancias psicoactivas constituyen un peligro para el individuo y la y es deber de los Estados prevenir y combatirla en su artículo 38 numeral 1 preceptúan:

Las Partes prestarán atención especial a la prevención del uso indebido de estupefacientes y a la pronta identificación, tratamiento, educación, pos tratamiento, rehabilitación y readaptación social de las personas afectadas, adoptarán todas las medidas posibles al efecto y coordinarán sus esfuerzos en ese sentido. (ONU, 1961)

Por tal motivo se entiende que los Estados se encuentran obligados a buscar la rehabilitación de las personas que se encuentren afectadas por sustancias psicoactivas, por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico lícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (ONU, 1988), “solicita a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que garanticen una adecuada atención, tratamiento, rehabilitación y la resocialización de personas consumidoras”.

En Colombia debido a los convenios anteriormente mencionados, se crea El Consejo Nacional de Estupefacientes, la autoridad nacional de drogas en Colombia. Este Consejo se encuentra en la primera línea de la estructura institucional del Estado colombiano. “Es un ente estatal, asesor del Gobierno Nacional encargado de la formulación, coordinación y seguimiento de la política pública de drogas y delitos relacionados. Este Consejo se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho”. (CICAD, 1996)

Mientras que en la Estrategia Antidrogas CICAD realizada en el año 1996, contiene las estrategias, planes, informes y reglamento para la lucha contra las drogas ilícitas, por tal motivo los estados que hacen parte son: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, entre otros, estos estados se comprometen con desarrollar planes contra la lucha de sustancias psicoactivas.

La Convención de las Naciones Unidas celebrada en el año 2000 en la cual los Estados miembros se comprometen a respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, protección a de las personas vulnerables, y la lucha contra la vulneración de derechos.

Igualmente, se encuentra la Declaración Política y Plan de acción 2009 de Naciones Unidas donde los estados quedaron comprometidos con buscar medidas para reducir el uso indebido de drogas y drogas que generan dependencia, por tal motivo en esta Declaración se busca “Reducir de la oferta ilícita de drogas, la fiscalización de precursores y de estimulantes de tipo anfetaminas. Cooperación internacional para erradicar el cultivo ilícito utilizado para la producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y en materia de desarrollo alternativo”. (ONU, 2009)

El entorno de los habitantes de calle también se encuentra precedido por menores de edad y por ello es importante mencionar lo que se establece en el artículo 19 de la Declaración Americana de Derechos Humanos (1948) que:

todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado por tanto cabe precisar que el Estado es garante del derecho para todas las personas y en especial para los niños, niñas y adolescentes.

En 1959 se consagra la Declaración de los derechos del niño donde los Estados partes de común acuerdo declaran como derechos del niño:

El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño, el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento, el derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados, el derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física, el derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad, el derecho a actividades recreativas y a una formación académica, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación, el derecho a crecer con tolerancia. (ONU, 1959)

La Convención sobre los derechos del niño en su artículo 6 establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, donde los Estados se comprometen adoptar medidas necesarias para garantizar este derecho, también se establece el derecho a la identidad, en el artículo 8 se estipula que: “Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.” (ONU, 1990)

Los niños, niñas y adolescentes que habitan en la calle se encuentran expuestos a todo tipo de abuso, es por ello que en el artículo 19 de esta convención se estipula:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de toda índole para la protección de los derechos de los menores de edad, ilos abuso de toda índole, ncluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. (Op.cit, 1990)

En la actualidad estado colombiano no garantiza este derecho a los menores de edad, es negligente al desconocer e implementar medidas para erradicar este tipo de abuso.

El artículo 24 de esta convención consagra el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes esto incluye servicios para tratamiento de enfermedades, también se consagra la prestación de la asistencia y atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños.

Por último, en esta convención se establece el reconocimiento del derecho del niño, niña y adolescentes que ha sido internado en un establecimiento para atención, protección o tratamiento por las autoridades competentes.

Cuadro 1. Sobre convenciones y Declaraciones Internacionales donde se estipulan la lucha contra los estupefacientes.

NORMA Y AÑO	CONTENIDO
Convención Única de 1961 de Naciones Unidas	sobre Estupefacientes
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 de Naciones Unidas	sustancias sicotrópicas de 1971

Declaración Política UNGASS 1998	Medidas de fomento de la Cooperación Internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas.
Convención de las Naciones Unidas 2000	Contra la Delincuencia Organizada
Declaración Política y Plan de acción 2009 de Naciones Unidas.	Declaración y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas de Naciones Unidas.
Convención de 1988 de Naciones Unidas	Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
Estrategia Antidrogas CICAD 1996	Contra el Abuso de Drogas

Fuente de elaboración: Propia

Normatividad Nacional.

La Constitución Política de 1991 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) establece:

Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, el Estado garantizará la vida, cuando la constitución habla de vida se debe entender por una vida digna pues es este quien debe garantizar los mínimos vitales o condiciones para vivir en sociedad.

Por tal motivo las entidades estatales tienen la obligación de prevenir, planear y garantizar los derechos a todas las personas preservando la integridad del estado, sin discriminación alguna, pues el artículo 5 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). establece:

la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”, garantizando que se respetarán los derechos en igualdad de condiciones y todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación.

El artículo 44 contempla:

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
(Op, cit, 1991)

Es por ello que el Estado Colombiano debe enfocar medidas para la prevención y restablecimiento de derechos de los niños que habitan en la calle en condiciones precarias, lamentables donde se presenta todo tipo de vulneración de derechos fundamentales, encontrarse el estado inmerso en violaciones debido a que debe prevalecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

La salud es un derecho que se encuentra regulado en el Artículo 48 (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), donde se consagra que:
la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo el control del Estado, pues este es quien garantiza a todos los habitantes. Por tal motivo se debe proteger y garantizar la salud a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional sin discriminación alguna.

La vivienda digna contenida en el artículo 5 (Op. cit, 1991), que reza: “el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”

Por tal motivo es obligación del estado garantizar el derecho a la igualdad, salud, vivienda digna, vida digna, derecho a la familia, al libre desarrollo de la personalidad mediante sus instituciones nacionales y territoriales, pues en el artículo 311 (Op. Cit, 1991) establece que:

Los municipios, son entidades político administrativas del Estado y su fin es prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que fe asignen la Constitución y las leyes.

Es por ello que las Alcaldías Municipales, deben crear y promover de políticas, y proyectos sociales.

Debido a que en la Norma de Normas, es decir, la Constitución Política, se encuentran consagrados los derechos fundamentales de todas las personas, en la ley 1641 de 2013 se establecieron los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle (PPSHC) y así, garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social, que es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del Estado pues priman allí derechos humanos y principios pilares como lo son la dignidad humana, autonomía personal, participación social. Así las cosas, y como tema central de la misma ley, el artículo 2 (Congreso de Colombia, 2013) define al Habitante de la calle como la "Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria".

Con la expedición del decreto 2083 del año 2016, la población habitante de calle debe contar para el acceso a los servicios del Régimen Subsidiado en Salud, mediante el cual es establece:

El listado censal de esta población será elaborado por las alcaldías municipales o distritales", listado del que carece la administración municipal de la localidad; por otro lado, no existe información acerca de pactos, convenios, acuerdos o protocolos para la atención de esta población en materia de derechos.

Normatividad Nacional En Cuanto A Sentencias De Las Altas Cortes.

Sentencia de Tutela-043 del 2015. Acción de tutela en el cual se resuelve la falta de políticas públicas para personas habitantes de calle, la Corte resuelve que las entidades estatales no pueden omitir sus obligaciones de garantizar los derechos fundamentales de toda la población.

Sentencia C-385 del 2014. La Corte Constitucional nos refiere sobre las normas y lineamientos para formulación de política pública social para habitantes de la calle donde constituye una medida que vulnera el derecho a la igualdad de trato de esta población en condiciones de vulnerabilidad. Para la Corte Constitucional a través de esta sentencia es de vital importancia nombrar a los habitantes de la calle en Colombia, conocer sus problemáticas, teniendo en cuenta que a comparación con otros grupos de especial protección constitucional estos tienen una mayor relevancia, pues bien, afectan a la población en general sin distinción de edad, sexo, raza, estrato social. Con lo anterior, son precisas las palabras del médico e investigador Luis Vólmar Quintero Pacheco en su escrito *La exclusión social en habitantes de la calle en Bogotá. Una mirada desde la bioética*, (2008), puesto que:

En sus sentencias, la Corte Constitucional ha delimitado el concepto del habitante de la calle, así como sus derechos y la especial obligación del Estado de garantizarlos por tratarse de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tal y como lo establece la obligación contenida en el artículo 13 de la Constitución Política, la Corte se ha encargado de establecer una categoría especial dentro de las personas consideradas como habitantes de la calle como lo son las personas de la tercera edad y niños.

Es claro que en las decisiones de la Corte Constitucional se define a los habitantes de la calle como “un grupo de personas que carecen de capacidad económica para sobrellevar una congrua subsistencia, y por razones físicas o de salud les resulta imposible procurarse tales medios” (Corte Constitucional, 2004), además, ha precisado que los habitantes de calle son personas que

“gozan de la plena titularidad de todos los derechos reconocidos en la Constitución, por lo cual la sociedad y el Estado no pueden ser indiferentes a su situación, pues así se lo exige el deber de solidaridad” (Corte Constitucional, 2006), y, “con el fin de proteger a esta población, el Estado está obligado a promover políticas de asistencia social que estén dirigidas a mejorar las condiciones de estas personas” (Corte Constitucional, 1993). Además, en caso de drogadicción que genere una condición de debilidad psíquica, “el Estado debe brindar al habitante de la calle la atención especializada de previsión, rehabilitación e integración social que se encuentra consagrada en el artículo 47 de la Constitución” (Corte Constitucional, 2002).

La Corte Constitucional establece dos categorías entre los habitantes de la calle, en primer lugar, los ancianos habitantes de calle, para quienes expresamente el artículo 46 de la Constitución consagra el subsidio alimentario, como una medida de solidaridad y protección hacia las personas de la tercera edad en tales condiciones (Corte Constitucional, 2006).

Para la Corte Constitucional, los niños, niñas y adolescentes habitantes de calle “carecen de una familia que lo asista y proteja, y es por esto, que la asistencia y protección incumbe directamente a la sociedad y, a nombre de esta, al Estado, a través de los organismos competentes para ello (ICBF)”. (Corte Constitucional, Sentencia T-029 de 1994)

En cuanto a la problemática abordada se encuentran pronunciamientos de la Corte Constitucional, a través de sentencias que han amparado los derechos de los habitantes de calle; entre estas se tiene la T-092 del año 2015, en la cual se ampara el derecho a la personalidad jurídica, al exigir la expedición gratuita del documento de identidad, acorde con el artículo 5° de la Ley 1163 de 2007. Respecto al derecho a la salud están las sentencias T-533 del año 1992, T-211 del año 2004, T-266 del año 014, en las cuales se establece la responsabilidad inmediata del

Estado en caso de carencia de recursos económicos y de apoyo familiar que brinden ayuda y protección.

Cuadro No. 2. Se puede apreciar las normas en Colombia que tienen relación con las drogas ilícitas y su tratamiento.

NORMA Y AÑO	CONTENIDO
Ley 13 de 1974	Aprobó la Convención única de estupefacientes de 1961
Ley 43 de 1980	Aprobó el Convenio de Viena de 1971
Ley 30 de 1986	Adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes
Ley 67 de 1993	Aprobó la Convención de las Naciones de 1988
Decreto 1355 de 1970	Dicta normas sobre Policía, contravenciones sociales.
Decreto 522 de 1971	Dicta normas sobre Policía
Ley 124 de 1994	Prohibió el consumo en espacios públicos, y en presencia de niños y niñas, y adolescentes.

Ley 1306 de 2009	Sobre salud, educación y rehabilitación
Ley 1566 de 2012	Dicta normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas.
Ley 1641 de 2013	Se establecieron los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle

Fuente de elaboración: Propia

En este capítulo se puede concluir que, si bien se constata un avance importante en la normatividad Colombiana y en la estipulación de consideraciones respecto a las necesidades humanas y la asistencia del Estado para con los habitantes de calle, falta mayor conexión con la realidad, ya que en la práctica, la restitución de derechos es dispendiosa e implica otros procesos de lucha por los derechos mientras que los temas de habitabilidad en la calle son situaciones que tienden a aumentarse en proporciones incontrolables sin que el Estado actúe de manera eficiente.

En cuanto a la normatividad del municipio de Dosquebradas no se encuentra alguna pues la ley 1641 del año 2013 dispone los lineamientos generales para la formulación de políticas en todo el territorio nacional, y en la actualidad, no se encuentra instaurado en el Plan de Ordenamiento Territorial como un problema local, es por ello que no se ha avanzado.

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE HABITANTES DE CALLE E INSTITUCIONES COMPETENTES

La calle es un espacio diseñado para que las personas realicen actividades de comercio, transporte, culturales, políticas y de participación ciudadana, es un espacio público en el cual los ciudadanos tenemos libertad para expresar ideas; por innumerables razones, se dan los estados de indigencia y habitabilidad en las calles en Colombia; cientos de personas terminan viviendo o, más bien, sobreviviendo en las calles del país enfrentando toda clase de necesidades, pero, en mayor medida, enfrentando el rechazo de la sociedad que se olvida que ellos son personas en igualdad de derechos y que, por vivir en dicha situación, ingresan al mundo de los actos ilícitos y delincuenciales.

El habitante de calle es una persona que vive bajo condiciones socioeconómicas precarias que se ve obligada a desarrollar su diario vivir en las calles, siendo éste un espacio que no consagra las características para habitar, puesto que las condiciones para que se puedan garantizar el bienestar y una buena calidad de vida son inaceptables, lo cual, conlleva a que los entornos ambientales y sociales sean peligrosos y no tengan equilibrio para vivir una vida digna y con las necesidades básicas satisfechas.

Ahora bien, debe analizarse si el Estado tiene parte de responsabilidad en esta situación, o si por el contrario les ofrece protección, subsidios y prácticas para mejorar su calidad de vida y evitar la mendicidad en general.

Como derechos humanos, o derechos inherentes de las personas encontramos que la ONU pretende con su declaración y promulgación que todas las personas puedan adquirir justicia, libertad y paz, garantizando una vida digna en condiciones mínimas, con políticas públicas

diseñadas para su resistencia, conservación y sobrevivencia en el mundo, pero los habitantes de la calle son a diario personas sometidas a toda clase de discriminación tanto directa como indirectamente; refiriéndonos al estado y la población en general.

Sin embargo, con referencia a los habitantes de la calle, se tiene que la justicia no es aplicada para ellos, dado que es entendida como una virtud mediante la cual se brinda a cada quién lo que le corresponde y, los habitantes de calle, son personas que viven en el desamparo enfrentando inclemencias, injusticias, humillaciones y rechazos. En cuanto a la libertad, si bien es cierto que no se encuentran en la cárcel, de cierta manera son personas que se encuentran sometidas a la voluntad de otras por cuanto dependen de terceras personas y de mendicidad, y para el caso del gobierno, básicamente no le son brindados los elementos necesarios para su sobrevivencia; y como tercer elemento, la paz, que no está presente casi en ningún momento de sus vidas, puesto que la paz es igual a un estado de tranquilidad perdurable, de calma, de sosiego y de relaciones positivas entre miembros de una sociedad y, como es visto, los habitantes de la calle permanecen en un estado totalmente contrario dado a que no tienen acceso a lugares que tengan libre esparcimiento.

En vista de que en Colombia no hay cumplimiento en las políticas públicas y legislación vigente dirigida a los habitantes de calle, vulnerando de esta manera los derechos humanos de cientos de personas que viven en este estado, es claro que no solo el gobierno sino también la sociedad, actúa con poca solidaridad, olvidando que detrás de cada habitante de calle se encuentra una persona, por lo cual no se debe ser irracional e indiferente a su situación y, además, se debe ser consciente de que no sólo es brindar un trato digno y solidario, sino también desarrollar iniciativas que disminuyan la mendicidad y conlleven a la recuperación de los hogares.

Según las cifras reveladas y estadísticas elaboradas por diferentes medios, se tiene que por lo menos 40.000 personas en Colombia son habitantes de calle (El Tiempo, 2016), siendo esto una gigantesca problemática ya que, por su condición de desamparo, son personas que recurren a la delincuencia y el vandalismo para obtener recursos que les faciliten su sobrevivencia en medio de la mendicidad y el abandono.

Los responsables del abandono y el aumento de personas habitando las calles son indiscutiblemente el Estado y la sociedad, pues se olvida que, a pesar de su manera de vivir, son personas que cuentan con igualdad de derechos civiles, económicos, culturales, según lo plantea la Constitución Política de Colombia.

El desarrollo de la libre personalidad es un derecho con el que cuentan todos los colombianos, es decir, que las personas habitantes de calle tiene la facultad de escoger, el ser como quiere ser, pero debe tenerse en cuenta que la mayoría de éstas personas se encuentran en dicha condición por circunstancias ajenas a su voluntad, por desprotección del gobierno, por dificultades familiares, por desamparo social, que los impulsa a ingresar al mundo del vandalismo, la prostitución, el consumo de drogas, la explotación sexual, entre otros, que generan desaseo, hambre, enfermedades y mendicidad.

A través de la especial protección que se encuentra dirigida a los habitantes de calle, se pretende que se practiquen hábitos de sobrevivencia fundamentales para evitar los actos delincuenciales que viven en su entorno y más específicamente, que haya oportunidad de rehabilitación en diferentes instituciones que facilitan el resurgimiento a la vida social y digna que esta población necesita.

La pobreza en medio de la cual vive esta población es un facilitador para la exclusión social ya que se les restringen y, en la mayoría de los casos, se les niegan múltiples oportunidades para

reingresar a la sociedad; la discriminación en Colombia ha generado actos denominados como “limpieza social”. ya que en ciertos espacios dicha población tiene arraigo.

La exclusión de la sociedad, para el caso de los habitantes de calle, está basada en un modelo de individualismo que crece sin límites y progresivamente y es la causa de que, a mayor sea el paso del tiempo, crezca aún más el número de personas que ingresen a las cifras de la pobreza extrema, lo cual ocasiona que la dignidad humana sea atacada y esta se encuentre en estados de vulnerabilidad, porque las personas que habitan la calle encuentran ciertas maneras de sobrevivir que son vistas como prácticas delincuenciales y que atentan contra ellos mismos, empezando por su cuerpo y por su estado mental.

La población de calle es habitada por niños, niñas, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que, por falta de asistencia gubernamental, carecen de condiciones mínimas para tener una vida digna, no cuentan con elementos materiales, ni siquiera los básicos para vivir bien, también carecen de lazos familiares activos y, en la mayoría de los casos, sus relaciones familiares están destruidas, lo cual hace que esta población vulnerable escoja siempre la mendicidad y asuma comportamientos “inadecuados” para la sociedad, causando así desprecio de parte de la misma.

Si la aplicación de derechos humanos y derechos en general se aplicara de manera clara y precisa, las intervenciones se darían a un nivel positivo, ya que se podrían sostener acercamientos mediante talleres de sensibilización, prácticas de servicio social y motivación a las familias para la recuperación de éstas personas, debe ser el Estado un eje de rehabilitación gratuita con resultados satisfactorios para que se facilite la consolidación de trabajos en equipo con las familias, mediante trabajos de intervención y gestión que realmente cuenten con el alcance social que se requiere; que los habitantes de la calle puedan participar en espacios comunitarios en los cuales se sientan bien y puedan hacer parte de una sociedad incluyente en la

cual sus necesidades son importantes y suplidas; que tengan un sentido de la orientación correcto y con expectativas en que sus potencialidades humanas sean aprovechadas mediante oportunidades de desarrollo en los ámbitos personal y laboral.

La obligación que tiene el Estado de ofrecer garantía a los derechos a los habitantes de calle plantea una serie de conflictos y, dicho sea de paso la inspiración del concepto de la justicia en el orden jurídico, ya que no existe igualdad de condiciones para asegurar una vida digna a las miles de personas que pasan a diario por las necesidades mencionadas y que también aspiran que, al ser cobijados por la Constitución Nacional, van a surgir de nuevo en relación con los principios en los cuales se basa el Estado.

Principales ciudades.

A continuación, se presenta un análisis del ámbito nacional, debido a que el panorama es angustioso porque, según los lineamientos de las políticas públicas, se ve claramente el aumento de la habitabilidad en las calles tal como puede observarse a través de un diagnóstico de las grandes ciudades del país en el cual se hace más que evidente la elevada población en situación de calle y las estrategias de cada ciudad para abordar esta situación de salud y seguridad pública.

En la Secretaría de Integración Social de Bogotá a través del plan de desarrollo denominado Bogotá Humana (Petro, 2014) se crea el proceso de inclusión social llamado Contacto Activo, para la ubicación de personas en albergues y lugares de sobrevivencia y así facilitar el acercamiento a sus espacios. Las últimas cifras encontradas fueron con corte al año 2014 en el cual se encontraron 173 viviendas improvisadas que se utilizan como albergues y son básicamente de estructuras hechas de material reciclable, también se logró la ubicación de 112 sitios destinados al uso de expendio de estupefacientes, dichos albergues y expendios eran

utilizados por 9.614 personas habitantes de calle (cifra con corte al censo del año 2011); en este contexto se ha tratado de velar por los derechos humanos mediante la utilización y participación de centros de desarrollo integral, autocuidado, resocialización y rehabilitación a través de acciones que contienen jornadas de aseo, salud, apoyo con profesionales, alimentación y en la mayoría de casos, con hospedaje.

En Medellín, el plan de desarrollo denominado “Medellín, un hogar para la vida” (Gaviria, 2012); está dirigido a los hogares de paso y permanentes donde se ofrecen servicios de aseo personal, lavado de ropa, complemento alimentario, atención básica en salud, atención psicológica y social y actividades educativas y recreativas para los 3.200 habitantes de la calle con los que cuenta la ciudad, según la información obtenida con corte al año 2013, igualmente, para la época del censo y la atención por parte de la Alcaldía, 103 personas ya habían sido rehabilitadas y entregadas a sus familia, sin embargo, la Personería de Medellín (2014, p.5), manifiesta constantemente preocupación por las condiciones en la cuales viven los habitantes de la calle y cuestiona las acciones del gobierno local entorno a la reducción de esta cifra y a la manera como se garantiza el derecho a la dignidad humana.

Para el caso de Cali, en el Valle del Cauca, su plan de desarrollo Calidad, una ciudad para todos (Guerrero, 2012), indica que la mayoría de sus habitantes de calle no cuenta con seguridad social subsidiada, la última cifra oficial es del año 2005 en la que se contaba con 1.645 personas de las cuales, la mayoría, manifestó que están en condiciones de mendicidad por factores netamente económicos. Desde la secretaría de Bienestar Social se ejecuta un proyecto denominado Fortalecimiento al Hogar de Paso con el cual se atendieron a diario 157 personas beneficiadas con servicios básicos de salud.

En Barranquilla se cuenta con hogares de paso para la priorización de adultos mayores, en el plan de desarrollo Barranquilla para Todos (Noguera, 2012), se establecieron metas encaminadas al fomento de la apertura de nuevos centros sociales de atención para 1.200 habitantes de calle. Con el último corte oficial en el año 2014, se indicó que fueron atendidas 120 personas mensuales con albergues y alimentación y se encuentran a la espera de la obtención de nuevos recursos que permitan aumentar las posibilidades de ayuda a esta población.

En Bucaramanga, según el censo realizado en el año 2006 y los estudios realizados para el plan de desarrollo “Bucaramanga Capital Sostenible”, (Bohórquez, 2012), se muestra que a pesar de la gran cantidad de recursos invertidos, la mayor parte de la población de habitantes de la calle está representada en niños y jóvenes y sólo un 45% son nacidos en la ciudad, los demás se han desplazo de diferentes partes del país a la capital santandereana.

DOSQUEBRADAS

La problemática de habitantes de calle en el municipio de Dosquebradas se ha venido incrementado, tanto así que en su avenida principal denominada “avenida Simón Bolívar” se observa, a cualquiera hora del día, un sin número de habitantes de calle consumiendo, haciendo sus necesidades corporales, robando y cometiendo otros actos delictivos; en la zona de la avenida donde se encuentran estas personas, se evidencia que está llena de basura, lo cual acarrea problemas de salud e inseguridad para los habitantes y, según el barrido de la información recolectada y analizada mediante entrevistas a funcionarios de la Secretaría de desarrollo Social y de la Personería de Dosquebradas, para la población en general, los habitantes de calle generan inseguridad a la sociedad y generan molestias, ya que se inyectan o se drogan a cualquier hora sin importar el lugar e, incluso, sin importar que existan menores de edad en la zona observándolos. Su apariencia, sus hábitos de vida en calle, su olor, la gran cantidad de desechos

en sus sitios de “vivienda”, heces, hacen de esta población un problema de seguridad y salud pública para Dosquebradas; aunado a esto, y según las entrevistas, se encuentra que esta población puede llegar a ser agresiva y conflictiva con el resto de los ciudadanos; la virtual desatención por parte del Estado a los derechos humanos de las personas habitantes de calle ha generado conflictos y violaciones a la norma, tales como:

- El estado de dignidad humana, que ya es crítico.
- La salud de esta población va en deterioro.
- La educación al habitante de calle es casi nula.
- La vivienda digna no ha sido garantizada en ningún caso.

En síntesis, visto el panorama de las principales ciudades de Colombia, y a pesar de la antigüedad de las estadísticas disponibles, se ha presentado atención humanitaria a los habitantes de calle, pero esta no es suficiente para cubrir las innumerables necesidades de este foco poblacional y, es de reconocer, que en la actualidad se vive una crisis humanitaria causada por el Gobierno de Venezuela debido a que el número de personas migrantes desde dicho país hacia Colombia ha sido desbordante; inicialmente se afectó de manera alarmante la ciudad Cúcuta por la cercanía limítrofe con el vecino país, pero con el pasar de los meses, la población venezolana se ha distendido por todo el territorio colombiano, lo que ha aumentado la informalidad laboral y también la delincuencia debido a que una parte no identificada de venezolanos migrantes en Colombia, se ha convertido en habitantes de calle porque deambulan con sus pocas pertenencias impidiendo el control de los espacios públicos, causando crisis sanitarias y de salud pública.

Vulneración De Derechos De Niñas Y Niños Habitantes De Calle.

En Colombia, los Niños Niñas y Adolescentes habitantes de calle incrementan cada vez más, debido a que los jóvenes ven en la calle un espacio de interacción social, sin tener presente que dicho espacio no cuenta con las condiciones mínimas de sobrevivencia y menos de formación, pues el estado no garantiza derechos como la educación, la salud, la recreación para este tipo de población; por tanto, los Niños, Niñas y Adolescentes habitantes de calle han hecho del espacio público un lugar donde realizan sus actividades diarias como lo son dormir, comer e interactuar con demás seres humanos, es por ello que se encuentran expuestos a vulneración de derechos y riesgos como se reflejan día a día en las calles de las diferentes ciudades, y de allí, el incremento en los índices de agresiones verbales y físicas, desnutrición, abandono, abusos sexuales, embarazo en adolescentes, etc.

El Estado ha realizado una serie de lineamientos (Bienestar Familiar, 2014) para la atención a los Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante, NNA) que se encuentran en condición de calle, pero dichas políticas no han sido efectivas para la mitigación de la problemática, puesto que los índices se incrementan de manera notable en cada una de las poblaciones, tal y como se observa en los semáforos de las ciudades, dado que los NNA buscan ingresos en trabajos informales (Op. Cit, p.8) con la finalidad de recaudar dinero y satisfacer las necesidades básicas del ser humano, pero no logran hacerlo dentro del margen de vida digna, puesto que el estado no garantiza las condiciones mínimas de subsistencia de los menores habitantes de calle, quien es el llamado a garantizar y efectuar los procesos de restablecimiento de derechos de cada uno de ellos de manera efectiva y generar políticas de mayor impacto, con el fin de cumplir los derechos reglados para este tipo de población, pues el estado no puede desconocer la importancia del desarrollo que trae consigo tener en un país NNA, con educación, salud, recreación, etc.

Las acciones institucionales que se deben constituir como foco de atención para los habitantes de la calle son programas que mitiguen sus necesidades en procura de la salud, e incluso, con miras a devolverlos a sus senos familiares a través de programas sociales que tengan trascendencia y múltiples modalidades de intervención para que éstas personas sean vistas como objetos de protección.

La estigmatización de la condición callejera es entonces un fenómeno de la realidad colombiana que golpea fuertemente al Estado y a la comunidad en general, es una situación de permanencia constante en la miseria que potencializa la exclusión social y el aislamiento de personas que también son seres humanos y no deberían vivir en precarias condiciones, para lo cual se debe recordar que la sociedad es vulnerable, la sociedad es un núcleo común de personas y que todos los colombianos tienen derecho a pertenecer a ella con los mismos derechos y deberes que los demás, sin importar sus condiciones sociales y económicas, para el caso objeto de estudio.

Es de resaltar que ha existido en muchos sectores la asistencia privada para las personas que habitan en la calle, siendo trascendental y, en ocasiones, una intervención muy superior a la gubernamental dado el objeto social de las tantas empresas que existen en el país. Son también instituciones de apoyo que ofrecen las ayudas sin obtener otra cosa que la satisfacción de ayudar a quienes más lo necesitan.

CAPITULO III: LINEAMIENTOS DE POLITICAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional en el año 2014 se dio inicio a un macro proyecto por parte del Ministerio de Salud para adelantar una estrategia para recolectar estadísticas de las personas habitantes de calle

que facilitaran los lineamientos generales de la política pública. Esta recolección se inició con las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, y Dosquebradas. Todo esto permitió que en el año 2016, el Ministerio de Salud y Protección articulara lineamientos y componentes de la Política Pública Social para Habitantes de Calle (PPSHC), cabe denotar que estos lineamientos se encuentran en borrador. (Presidencia, 2018)

En estos lineamientos, se plantea como un problema la dificultad de recolectar la información debido a que el Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) no incluye a esta población en el respectivo censo nacional, lo que genera los vacíos de información que se evidencian”. (Esguerra Muelle, 2015, pág. 5)

En los lineamientos estratégicos de la Política Pública Social de Habitantes de Calle se plantean tres objetivos específicos, los cuales se concretan en:

la prevención para habitantes de calle en la acepción que las entidades competentes deben generar actividades informativas al público y a los menores de edad en los centros educación acedemica, una atención integral a los habitantes de calle, e inclusión social y exigibilidad de derechos por parte de esta población. (Esguerra Muelle, 2015)

También se propone la necesidad indispensable de la resocialización e inclusión al habitante de calle dentro de la sociedad mediante un trato diferencial, sin embargo, esta investigación encuentra a este enfoque como ilógico, pues en el objetivo específico de inclusión social, se debe tener como referente la constitución política de Colombia del año 1991 donde en su artículo 13 dispone el derecho a la igualdad sin discriminación alguna, es decir, estos lineamientos deben buscar que los habitantes de calle tengan un trato igualitario ante la sociedad, pues se debe

generan un cambio el que estas personas dejen de ser vistas como mendigos, desechables, nómadas, residuos.

Los principios son base indispensable para los lineamientos de esta Política Pública, pues bien en este lineamiento se dispone:

En particular las personas habitantes de la calle y sus círculos sociales participarán, de acuerdo con su autonomía, en los procesos de planificación, ejecución y evaluación de los programas, planes y acciones que se desarrollen para su inclusión en la vida política, económica, social y cultural de los territorios en donde transcurren. El Estado en el orden territorial apoyará los procesos de organización y capacitación de la ciudadanía en general y de las personas habitantes de calle y sus círculos sociales para el logro de esta participación. (Esguerra Muelle, 2015, pág. 15)

Cabe resaltar que los lineamientos también consagran los principios establecidos en la ley 1641 de 2013 (Congreso de Colombia, 2013), la cual implementa la autonomía personal como la posibilidad que tiene cualquier persona de decidir sobre su vida; el principio de la concurrencia el cual preceptúa que el Estado colombiano mediante todas sus entidades deben actuar de manera oportuna; el principio de la coordinación que permite a las entidades trabajar conjuntamente para disminuir la vulneración de derechos; el principio de dignidad humana como pilar constitucional a favor de la persona, como el mínimo vital para vivir y garantizar el aseguramiento de los derechos para permanecer en sociedad, también consagra como principio la exigibilidad de derechos en la cual cualquier persona puede exigir a la autoridad competente con el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos; el principio de interés superior del niño, niña y adolescentes para una integral atención y garantizando que los derechos de estos menores de edad tengan prevalencia sobre otros; estipula la participación social como un reconocimiento

a los habitantes de calle, en la cual los reconoce como sujetos de derecho; el principio de la protección Integral como una la seguridad jurídica que permite el restablecimiento.

Como último principio y no menos importante, se destaca el principio de la Subsidiariedad, en la cual el estado y los departamentos deben brindar apoyo a los municipios que no cuenten con capacidad financiera e institucional para ejercer las políticas.

Estos lineamientos deberían tener en cuenta que la participación en sociedad no puede pasar por encima o violar el derecho de la autonomía personal, y el derecho a la autodeterminación, pues es se estaría contrariando la Constitucional Nacional y dejaría en un limbo en el cual la población en general creería que es de mayor relevancia e importancia la sociedad como tal y no la protección del habitante de calle, que son sujetos precisamente de especial cuidado.

Los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud deben abordar unos enfoques los cuales permiten que las entidades nacionales, departamentales y municipales puedan desarrollar diferentes escenarios, estos son:

El Enfoque de Derechos, que centra como base y su desarrollo en los derechos humanos, el Enfoque de Desarrollo Humano, donde las personas pueden desarrollar libertades, capacidades que permiten mejor su condición para un adecuado bienestar dejando atrás la vida en calle o continuar en esta bajo otras garantías; el Enfoque de determinantes sociales de la salud permite conocer a profundidad el entorno donde cada persona habitante de calle creció, su crianza, familia, educación, lasos sociales, su salud, sus enfermedades y así dar a conocer su estado actual y promover soluciones; el Enfoque diferencial, como el derecho a opinar por parte de los ciudadanos desde los diferentes escenarios en aras de generar una democracia participativa e

incluyente; el Enfoque de género, como el reconocimiento de la igualdad del género femenino permitiendo identificar; el Enfoque de curso de vida: (Congreso de Colombia, 2013)

Es el abordaje de las personas, familias y comunidades durante el continuo vital, que permite entender la relación dinámica de factores que ocurren más temprano en la vida y sus consecuencias posteriores en la salud y como las experiencias acumulativas pueden definir las trayectorias para el desarrollo humano y social, así como el impacto en los resultados en salud

Asimismo, el Enfoque territorial proyecta la intervención social y económica mediante los territorios, pues, no es lo mismo generar políticas en ciudades capitales como la proyección de políticas en municipios donde su territorio y población es un poco menor (Calvo, 2005).

Los anteriores enfoques se deben desarrollar mediante objetivos generales y objetivos específicos, los cuales a según el lineamiento del Ministerio de salud se deben basar en:

Como objetivo general centra sus lineamientos en la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las personas y que recae el cumplimiento de esta obligación en cabeza del Estado; los objetivos específicos son tenidos en cuenta con base en la Ley 1641 de 2013 en la cual contiene como objetivos el Desarrollo Humano Integral que promueve el talento humano mediante proyecto de vida logrando un bienestar que permite dejar la vida en la calle o seguirla pero en mejores condiciones protegiendo así a la persona; la salud como derecho fundamental indispensable para el desarrollo de la vida; el trabajo y responsabilidad social incrementando la productividad de los habitantes de calle, generando desarrollar una vida digna; un objetivo específico que genere redes de apoyo social permitiendo la construcción de entidades, organizaciones sociales, institucionales, generando apoyo a esta población. (Presidencia, 2018)

La metodología empleada en el lineamiento emanado por el Ministerio de Salud en la caracterización reúne entrevistas a funcionarios de las Secretarías de Salud en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Dosquebradas, información proveniente de los foros regionales, bases de datos de las Secretarías de Desarrollo Social de ciudades del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Dosquebradas), Censos poblacionales de habitante de calle, información del ICBF, también utilizaron investigaciones y diagnósticos nacionales e internacionales.

Para realizar este diagnóstico el Ministerio de salud (Presidencia, 2018) solicitó a las secretarías de desarrollo social de los municipios anteriormente nombrados una recopilación de la información respecto de las personas habitantes de calle así: 1) Primer nombre, 2) Segundo Nombre, 3) Primer Apellido, 4) Segundo Apellido y 5) Número de identificación (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro único, cédula de extranjería, número de pasaporte) esto con el fin de que este barrido de la información diera una estadística o una mirada del número de habitantes de calle que se encuentra en estos municipios.

Otro compromiso de los entes territoriales por parte de las Secretarías de Desarrollo Social fue realizar una caracterización de la población habitante de calle, pues en el país no existían cifras oficiales respecto de esta población y, cabe resaltar, para crear una política pública se deben tener una caracterización y estadísticas de los habitantes de calle en su totalidad.

En estos lineamientos para las políticas públicas de habitantes de calle es fundamental conocer las personas habitantes de calle que se ven expuestas a ciertas circunstancias que pueden situarlos en condición de inferioridad o peligro, como lo son la falta de vivienda, la falta de empleo, falta de amor, falta de educación, el deterioro de la red familiar, a falta de ayuda de las instituciones, la falta de educación, violencia intrafamiliar, la falta de salud, y el gran impacto

social, entre otros factores que incitan a que caigan en situaciones como el alcoholismo, la prostitución, la explotación sexual, la drogadicción, enfermedades como el VIH sida, enfermedades mentales, entre otros.

Cabe resaltar que las circunstancias anteriormente mencionadas son el pilar fundamental para que las personas se vean expuestas a la condición de habitantes de calle y son la motivación para permanecer en este estado, el tiempo de permanecer en condición de permanencia de calle es una variable constante, pues bien en las estadísticas encontradas por parte del censo de 2018 (DANE, 2018) en Bogotá determinó que el 68% de las personas habitantes de calle llevan 3 años o más en esta condición; por otra parte en el censo de 2014 en la ciudad de Medellín el 74% de las personas habitantes de calle llevan 5 o más años, viviendo en la calle.

La sociedad colombiana en su gran mayoría, toda vez que se identifica como una sociedad “religiosa“, tradicional, conservadora, con pensamientos basados en su fe, ve a las personas habitantes de calle como “enfermos con limitaciones”, y es por ello que el factor laboral para las personas habitantes de calle es limitado; debido a esto, los habitantes de calle se encuentran con problemas económicos, empleo informal o precario, consumo abusivo de sustancias psicoactivas, maltrato y desplazamiento o cualquier tipo de situación violenta que se pueda desencadenar en este escenario.

Para nadie es un secreto que las personas en condición de habitante de calle en su mayoría no tienen acceso a una vivienda, pues es un factor fundamental por el cual, en su mayoría, deben pernoctar en calle y de allí, son obligados en las mañanas, incluso de manera agresiva, a levantarse del espacio público. Asimismo, es mucho menor la posibilidad de poder educarse, pues en Colombia no existe una igualdad de condiciones para el acceso a la educación, las

personas habitantes de calle en su mayoría no han terminado la educación básica y, en la actualidad, las alcaldías no cuentan con programas que los incluyan en procesos de formación educativa.

La salud es un derecho fundamental pero las personas habitantes de calle no cuentan con una higiene adecuada, este tema es bastante complejo dado que no cuentan con un baño diario o duchas en los alojamientos transitorios, o productos de aseo, además, no cuentan con atención integral en salud para ser revisados físicamente, en razón a que solo reciben esta atención cuando son ingresados a los hospitales por urgencia. Sin embargo, el panorama de la alimentación de estas personas es aún peor, pues se podría considerar como nula, ya que todos buscan calmar el hambre realizando actividades de reciclaje o búsqueda de comida en la basura o pidiendo las sobras en los restaurantes.

La identificación de las personas en condición de calle es compleja, puesto que ellos no cuentan con un documento que los identifique, los habitantes de calle no están carnetizados, no traen consigo la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad en el caso de menores, entre otros. Este tema es de vital importancia debido a que para ser atendidos en el enfoque de cuidado y salud deben tener plena identificación.

En la actualidad no se cuenta con una política pública para los habitantes de calle, pues los lineamientos del Ministerio de Salud se encuentran en borrador, y ningún municipio ha implementado medios para prevenir, garantizar e implementar la protección de los derechos humanos de estas personas; es por ello que se requiere de manera inmediata la proyección de estrategias a nivel local y nacional pues estos lineamientos se quedan cortos al momento de

estudiar las causas , características y las posibles soluciones basadas en las encuestas de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social.

Las entidades competentes a nivel nacional y local se quedan limitadas al momento de adoptar medidas de prevención para la problemática de habitantes de calle, los municipios en su plan de ordenamiento territorial deben establecer mecanismos para contrarrestar el problema de habitantes de calle, toda vez que no se están ejecutando estos lineamientos. La situación de las personas habitantes de calle es grave y precaria, por ello es necesario e indispensable la implementación de medidas para la protección de los derechos humanos de estas personas y debido a la inoperancia de las políticas públicas, el Estado Colombiano se encuentra violando los tratados, acuerdos, convenios, convenciones internacionales, la misma Constitución Política y un sin número de normas donde se garantizan los derechos de estas personas.

Para el caso de los habitantes de calle del municipio de Dosquebradas, Risaralda, se evidenció que el Estado los tiene totalmente desprotegidos, no hay cumplimiento a las normas, no existen cifras y estadísticas actualizadas que sirvan como apoyo y fundamento para la realización de trabajos que se ejecuten para el mejoramiento de su calidad de vida. Son una población vulnerable a todas luces y que no cuentan con protecciones mínimas.

CONCLUSIONES.

Los insumos utilizados para la presente investigación, fueron vitales para definir estrategias cuya utilidad fue el resultado de la investigación, resaltando que ha sido un tema específico y que

competite no solo a las ciudades estudiadas sino a todo el país, lo cual hace más útil la calidad del contenido.

- La muestra documental permitió ordenar sistemáticamente la información durante el proceso de la investigación, garantizando así su identificación.
- Es necesario que la población Colombia dé un trato adecuado a las personas habitantes de calle y no sean mala llamados pues esto genera un alto porcentaje de discriminación y ofensas para esta población.
- Es necesario la implementación de políticas públicas que ser exigibles e implementadas ante diferentes organismo o instituciones nacionales pues estas tienen como fin la salvaguarda de sus derechos fundamentales.

RECOMENDACIONES.

1. Los lineamientos para generar políticas públicas de habitantes de calle, deben generar los Planes de Ordenamiento territorial de los municipios del país, deben consagrar como problemática y así será posible apuntar a generar una solución para la población en general, garantizando derechos fundamentales.
2. Los lineamientos de políticas públicas deben tener en cuenta la protección integral de los menores de edad, por ello deben consignar la prevención y protección de los derechos para los NNA como sujetos de derechos.
3. Capacitar a todas las instituciones que tengas competencia en la aplicación de las Política Pública con el fin de garantizar una efectiva inclusión social.

4. Brindar protección que garantice derechos con miras a que la habitabilidad en la calle es un estilo de vida, pero el Estado debe garantizar condiciones dignas, esto según diversas sentencias emanadas por la Corte Constitucional.

BIBLIOGRAFÍA

- Asamblea Constituyente de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia*. Publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Bogotá.
- Bohórquez Pedraza, Luis Francisco. (2012). *Plan de desarrollo “Bucaramanga Capital Sostenible” 2012-2015*. Alcaldía de Bucaramanga. Colombia. Recuperado online en: (<http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/bucaramanga-pd-2012-0215.pdf>)
- Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Pública - (CEDETES). (2007). *La situación de Salud de Santiago de Cali. Una mirada desde la salud pública*. Universidad del Valle – Facultad de Salud. Cali, Colombia. Recuperado online en: (http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Modelo_Salud_Publica_Colombia-Cali-2007.pdf)

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas - CICAD. (1996).

Fortalecimiento institucional: Colombia. Organización de Estados Americanos. Washington D.C., Estados Unidos. Recuperado online en:

(http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/fortalecimiento_institucional/planesnacionales/fichas/colombia_spa.asp)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. (2018). *Inclusión social, económica y política de las personas mayores*. Enfoques de la CEPAL. Santiago, Chile.

Recuperado online en: (<https://www.cepal.org/es/enfoques/inclusion-social-economica-politica-personas-mayores>)

Congreso de Colombia. (2006). Proceso Administrativo De Restablecimiento De Derechos, *Código de la infancia y la adolescencia, Ley 1098 de 2006*. Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006. Bogotá, Colombia.

Congreso de Colombia. (2013). *Ley 1641 de 2013: Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013. Bogotá.

Corte Constitucional de Colombia. (Diversos años) Sentencias de tutela: T-043 de 2015, T-092 de 2015, T-266 de 2014, T-523 de 2006, T-119 de 2005, T-211 de 2004, T-029 de 2004, T-684 de 2002, T-376 de 1993, T-533 de 1992. Bogotá.

Corte Constitucional de Colombia. (2014). *Sentencia de Constitucionalidad C-385 de 2014*. Bogotá.

Corte Constitucional de Colombia. (1998) *Sentencia de Unificación SU-747 de 1998*. Bogotá.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). *Censo nacional de población y vivienda*. DANE. Bogotá, Colombia. Recuperado online en (<http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018>)

Esguerra Muelle, Carolina. (2015). *Documento de apoyo: Propuesta Lineamientos y Líneas estratégicas de la Política Pública Social para las personas Habitantes de la Calle (PPSHC) - Documento para ser validado con entidades del orden nacional y territorial*. Oficina de Promoción Social - Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá, Colombia.

Gaviria Correa, Anibal. (2015). *Informe Final de Gestión*. Alcaldía de Medellín. Medellín, Colombia. Recuperado online en: (https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo/RendicinPblicadeCuentas_0/Shared%20Content/PDFs/informe-gestion-2015-baja.pdf)

Gaviria Correa, Anibal. (2012). *Plan de desarrollo “Medellín un hogar para la vida” 2012-2015*. Alcaldía de Medellín. Medellín, Colombia. Recuperado online en: (https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpcccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/PlaDesarrollo2012-2015/2012-04-30_Proyecto%20de%20acuerdo%20VERSION%20COMPLETA.pdf)

Guerrero Velasco, Rodrigo. (2013). *Rendición de cuentas Periodo 2012*. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali, Colombia. Recuperado online en:

(http://www.cali.gov.co/comunicaciones/publicaciones/50580/informe_tcnico_rendicin_de_cuentas_periodo_2012/)

Guerrero Velasco, Rodrigo. (2014). *Rendición de cuentas Periodo 2013*. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali, Colombia. Recuperado online en:
(<http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2015/rendicion/rendicion2014.pdf>)

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2014). *Análisis de la situación de vida en calle de niños, niñas y adolescentes en Colombia*. Observatorio del Bienestar de la Niñez, ICBF. Bogotá, Colombia. Recuperado online en:
(<https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/publicacion-53.pdf>)

Kellet, Peter. Moore, Jeanne. (2003). *Routes to home: Homelessness and home-making in contrasting societies*. Habitat International. 27. Pag. 123-141.

L. F. Aroca, Herazo, R. Hoyos, M. Granados, M.. Otero & C.Gómez, C. (2013). *Habitantes de la calle: derechos sociales vs. libertad civil*. Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.

Ministerio de Protección Social (2018). *Sala situacional de la Población Habitante de calle*. Colombia. Recuperado online en:
(<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacional-habitante-calle2018.pdf>)

Ministerio de Educación. (2009). *Plan de Atención Integral*. Ministerio de Educación de Colombia, Bogotá. Recuperado online en:

(<https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/w3-article-178036.html>)

Montalván Loaiza, Paúl Alexander. (2011). *La prevención de la mendicidad de niños, niñas y adolescentes como problema social y jurídico en el Ecuador*. Tesis para optar al título de abogado. Universidad Nacional de Loja. Ecuador. Recuperado online en:

(<http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/1330/1/TESIS%20%28PA%C3%9AL%20MONTALV%C3%81N%29.pdf>)

Montalvo Gómez, Mónica. (2009). *Los Problemas Sociales y Económicos de la Niñez y la Adolescencia*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito-Ecuador.

Nieto, Carlos J. Koller, Silvia H. (2015). *Definiciones de Habitante de Calle y de Niño, Niña y Adolescente en Situación de Calle: Diferencias y Yuxtaposiciones*. Revista Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records, Vol 5, Num 3., páginas 2097-2239. Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM. Ciudad de México.

Nikken, Pedro. (2019). *El concepto de derechos humanos*. Corte IDH: Estudios básicos de derechos humanos I. San José, Costa Rica. Recuperado online en:

(<http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/el-concepto-de-derechos-humanos.pdf>)

Noguera, Elsa. (2012). *Plan de desarrollo “Barranquilla florece para todos” 2012-2015*. Alcaldía de Barranquilla. Colombia. Recuperado online en:

(https://www.barranquilla.gov.co/component/docman/doc_download/1487-plan-de-desarrollo-2012--2015-barranquilla-florece-para-todos)

Núñez Rueda, Silvia Nathalia. (2014). *Población en situación de calle: desafíos de los programas de inclusión social en Bucaramanga (2012- 2014)*. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia. Recuperado online en: (http://investigacion.bogota.unal.edu.co/fileadmin/recursos/direcciones/investigacion_bogota/documentos/enid/2015/memorias2015/ciencias_sociales/poblacion_en_situacion_de_calle_de_safios_de.pdf)

OEA. (1948). *Declaración Americana de Derechos Humanos*. Organización de Estados Americanos. Bogotá, Colombia. Recuperado online en: (<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp>)

OEA. (1969). *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Organización de Estados Americanos. San José, Costa Rica. Recuperado online en: (https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm)

ONU (1959). *Declaración de los derechos del niño*. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado online en: (<https://www.humanium.org/es/declaracion-1959/>)

ONU (1961). *Convención única de 1961 sobre estupefacientes*. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado online en: (https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/1961Convention/convention_1961_es.pdf)

ONU. (1988). *Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico lícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas*. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado online en: (https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf)

ONU (1990). *Convención sobre los derechos del niño*. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado online en: (<https://www.humanium.org/es/declaracion-1959/>)

ONU. (2009). *Declaración Política Y Plan De Acción Sobre Cooperación Internacional En favor De Una Estrategia Integral Y Equilibrada Para Contrarrestar El Problema Mundial De Las Drogas*. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado online en: (https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_52/Political-Declaration2009_V0984966_S.pdf)

Periódico El Tiempo. (2016) *Reportaje: Los oscuros hilos que mueven la indigencia en Colombia*. Publicado en diciembre de 2016. Casa Editorial El Tiempo. Bogotá, Colombia. Recuperado online en: (<https://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/cifras-sobre-los-habitantes-de-calle-e-indigentes-en-colombia/16774657/1/index.html>)

Personería de Medellín. (2014). *Informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín*. Personería de Medellín – Universidad de Medellín. Colombia.

Petro Rugeles, Gustavo Francisco. (2016). *Informe de rendición de cuentas Bogotá Humana - 2012 / 2016*. Alcaldía de Bogotá. Bogotá, Colombia. Recuperado online en: (<http://fuga.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-bogota-humana-2012-2016>)

Presidencia de Colombia. Ministerio de Protección social. (2016). *Decreto 2083 de 2016: por el cual se modifica el artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social*. Diario Oficial No. 50092 de 19 de diciembre de 2016.

Presidencia de Colombia. Ministerio de Protección social. (2018). *Política Pública Social para Habitante de calle*. Presidencia de la República de Colombia. Bogotá. Recuperado online en:
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/politica-publica-social-habitante-de-calle.pdf>)

Quintero Pacheco, Luis Vólmar. (2008). *La exclusión social de "habitantes de la calle" en Bogotá: una mirada desde la bioética*. Revista Colombiana de Bioética, 3 (1), Pags. 101-144. Bogotá, Colombia. Recuperado online en:
<http://www.redalyc.org/pdf/1892/189217248005.pdf>)

Ruiz López, Domingo. Cadénas Ayala, Carlos Eduardo. (2005). *¿Qué es una política pública?*. Revista Ius Unla, Año V, número 18. Universidad Latina de México, Michoacán, México. Recuperado online en:
<http://www.unla.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm>)

Sierra Rodríguez, Daniela. Carillo Payán, Daniel Hernando. (2010) *Aproximación jurídica a la problemática de los habitantes de la calle en bogotá y algunas propuestas hacia su protección*. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. Recuperado online en:
<https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Clinica-de-Interes->

Publico/documentos/PROBLEMATICA-DE-LOS-HABITANTES-DE-LA-CALLE-EN-BOGO/)

Tosi, Antonio. (1999). *Homelessness and the Housing Factor: Learning from the Debate on Homelessness and Poverty*. Estados Unidos. Citado en: European Journal of Homelessness, Volume 1, December 2007. Recuperado online en: (<https://www.feantsa.org/fr/european-journal-of-homelessness/2007/05/07/european-journal-of-homelessness-volume-1-2007>)

Uribe, M. T. (2003). *Esfera pública, acción política y ciudadanía. Una mirada desde Hannah Arendt*. En L. y. Carrillo, Los clásicos de la filosofía política (pág. 308). Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Ventura Robles, Manuel Enrique. (2005). *La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Civiles y Políticos. Estudios sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos*. San José, Costa Rica. Recuperado online en: (<http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31034.pdf>)

World Bank. (2013). *Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity-Overview*. Washington, DC, Estados Unidos. Recuperado online en: (<http://documentos.bancomundial.org/curated/es/175121468151499527/pdf/817480WP0Spani0IC00InclusionMatters.pdf>)